

25 AÑOS DE AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

Se puede presumir que el interés público es aquel que los hombres escogerían si vieran claramente, pensarán racionalmente y actuarán desinteresadamente.

Walter Lipfmann

Se conmemora este año de 2004 el XXV aniversario de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos. Las últimas elecciones municipales, antes de la dictadura del General Franco, se celebraron en España el día 25 de Abril de 1933. Tras la Guerra Civil, iniciada el día 18 de Julio de 1936 con el alzamiento de parte del ejercito español en contra del gobierno legítimo y democrático de la República, los alcaldes eran elegidos por el ministro de Gobernación, en el caso de los municipios de más de diez mil habitantes y por el Gobernador Civil en los pueblos donde no se alcanzaba este número de población.

Un año después de ser aprobada la Constitución Española, que ponía fin a un período de dictadura en este país, y más en concreto el día 19 de Abril de 1979, los alcaldes elegidos por el pueblo, por primera vez en cuarenta y seis años, tomaban posesión de su cargo y se convertían en auténticos representantes de la ciudadanía por decisión libre y directa de los hombres y mujeres de cada comunidad. Por primera vez en más de cuatro décadas un grupo de ciudadanos asumía libremente la obligación de representar y comprometerse a mejorar las condiciones de vida y los servicios públicos de la colectividad.

Afrontamos el reto de trabajar sin tutelas por nuestro desarrollo. Asumimos la responsabilidad de ser la administración más cercana al ciudadano, la más eficaz, la más innovadora. Hoy los municipios nos hemos convertido en un pilar básico de la consolidación democrática de este país y hemos protagonizado la búsqueda y consecución de un equilibrio territorial de difícil encaje.

Muy pocos ponen en estos momentos en tela de juicio el papel jugado por los ayuntamientos en los últimos veinticinco años. En los ocho mil ciento ochenta municipios del estado español se ha vivido una transformación extraordinaria en todos sus ámbitos. Desde un cambio absoluto en el modelo de urbanismo y dotación de equipamiento hasta la consecución de una vertebración y cohesión social sin parangón, partiendo absolutamente desde cero y trabajando inicialmente con una legislación que provenía del franquismo, para dar nuevas respuestas a los ciudadanos.

En los últimos años el nivel de inversiones en los municipios de España ha superado notablemente al realizado por el gobierno central, lo que habla a las claras de la importante presencia del municipalismo en la consecución de mejores cotas de calidad de vida de nuestros ciudadanos y más teniendo en cuenta que el reparto financiero a los ayuntamientos no llega al 15% del total de todo el Estado. Además, los municipios tienen hoy día la mitad de deuda que sostienen las comunidades autónomas e invierten 8.900 millones frente a los 8.200 de las autonomías.

Todos los estudios sociológicos avalan que los hombres y mujeres de este país hacen un menor cuestionamiento de los pagos de los impuestos municipales que los cobrados por las autonomías y el Gobierno central, y eso que el 50% de los recursos de los ayuntamientos provienen de impuestos directos y el resto del Estado, frente a las autonomías donde los impuestos propios rondan sólo el 20%.

La cercanía a los ciudadanos nos ha obligado a asumir, año tras año, múltiples competencias de carácter supramunicipal en servicios sociales, cultura, deportes, mujer, mayores, vivienda, políticas preventivas..., dando un auténtico protagonismo social y progresista a esta joven democracia y a sus ciudadanos, trabajando desde la proximidad, la confianza y la complicidad.

En apenas veinticinco años hemos pasado de tener una población resignada a las carencias a una población exigente y comprometida.

Somos conscientes de que nos queda mucho por hacer, pero nos queda también la satisfacción de haber compartido con una amplia base social unos años de transformación histórica.

Afortunadamente el artículo 140 de la Constitución lo deja absolutamente claro : " La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena...". ¡ Que sería de esta parte más débil del engranaje sin esta protección!.

Hoy desde muchos ámbitos del municipalismo trabajamos por un " nuevo municipio" donde desde la implicación ciudadana directa se propicie una profundización en el desarrollo democrático del conjunto de los pueblos que conforman este estado plural. Democracias directas, participativas, informadas, soberanas.

Abogamos por la potenciación de redes cívicas locales que desde las realidades de cada lugar abran al mundo nuevas propuestas basadas en la solidaridad, sostenibilidad y también en políticas económicas y de mercados locales, autoproductivas.

Abogamos por políticas propias de seguridad, cercanas, frente al miedo imperante; por la protección de los más débiles con los que convivimos día a día; por la revalorización de nuestro patrimonio...

Abogamos por una democracia real y plena, y es que como escribió Bluntschli " la política debería ser realista; la política debería ser idealista : dos principios que son verdaderos cuando se complementan, falsos cuando están separados."

Debemos propiciar una apuesta firme por la presencia de los municipios en el Senado, en su condición de Cámara Territorial y, como defiende en estos momentos la FEMP, porque se creen los mecanismos necesarios para que se pueda resarcir el gasto histórico asumido por los ayuntamientos en servicios prestados sin obligaciones para ello.

Por eso es absolutamente imprescindible la solidez de la Federación Canaria de Municipios, que preside acertadamente Ramón Miranda, y la consolidación definitiva del Consejo Canario de Coordinación y Cooperación Municipal, un órgano fundamental para confirmar el papel de los municipios en esta Comunidad y para trabajar, sin pausas y con absoluta firmeza, por la consecución de las competencias que les son propias a los municipios canarios, y que, al contrario de lo sucedido entre el Estado y la Comunidad y entre esta y los Cabildos, se retrasa y se aplaza, legislatura tras legislatura. Sólo desde la resolución definitiva de este problema, con la dotación de los recursos suficientes para poder hacer frente a sus funciones reales, se podrá garantizar una auténtica participación de los ciudadanos en el desarrollo del país.

ANTONIO MORALES MENDEZ
ALCALDE DE AGUIMES